

Honduras

Vientos huracanados y renovación política

Leticia Salomón

Honduras se encuentra atrapada entre los estragos producidos por el huracán Mitch desde hace más de un año. Mientras tanto, se intensifica la actividad político-partidaria cuando aún no se promedia la actual gestión gubernamental, y hay una mayor presencia de la sociedad civil en el ámbito local y nacional. Transparencia, participación, descentralización, rendición de cuentas, reforma política y mayor responsabilidad ante lo público, son los temas de actualidad que motivan la participación ciudadana y que obligarán a los partidos políticos a definirse entre modernidad o tradición, de cara a los futuros procesos electorales.

Honduras inició la transición democrática en 1980, lo que significa que lleva casi dos décadas de ejercicio democrático-electoral. En este lapso, se han realizado seis procesos electorales que dieron origen a un gobierno militar de transición, cuatro gobiernos liberales y uno nacionalista.

El tránsito a la democracia ha presentado dos fases claramente diferenciadas: la primera, en la década de los 80, de transición política, mucha actividad electoral, debilidad institucional y fuerte presencia militar; la segunda, en la década de los 90, de transición cultural e institucional, restablecimiento de la supremacía civil sobre los militares, fortalecimiento de la democracia electoral, construcción de una cultura política democrática y creciente protagonismo de la sociedad civil.

La reafirmación del control civil

La finalización de la Guerra Fría y de la crisis centroamericana liberaron impulsos civilistas que comenzaron a cuestionar la presencia y prepotencia

LETICIA SALOMÓN: socióloga y economista, profesora-investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh); especialista en temas de sociología política; autora de varios libros sobre la realidad hondureña y centroamericana.

Palabras clave: situación política, partidos, sociedad civil, Honduras.

de los militares en el escenario político. Estos impulsos se plasmaron en la eliminación de las postas militares de control carretero; imposición del fuero civil por encima del fuero militar; sustracción del ámbito castrense de la policía de investigación, primero, y de toda la policía después; eliminación del servicio militar obligatorio; restitución del control civil sobre instituciones acaparadas por los militares, como la empresa de telecomunicaciones, Dirección de Migración, Marina Mercante e Instituto Geográfico Nacional; exigencia de cuentas a los militares violadores de derechos humanos; eliminación del cargo de jefe de las Fuerzas Armadas y nombramiento de un civil al frente del Ministerio de Defensa.

Todo esto fue minando el protagonismo castrense, colocándolo en el lugar subordinado que le confiere la democracia, al punto que las Fuerzas Armadas no son consideradas ya como una amenaza a la estabilidad institucional, ni siquiera como un actor en el actual escenario político.

La gestión de gobierno

El actual presidente, Carlos Roberto Flores (1998-2002), ex-presidente del Congreso en el anterior gobierno liberal, es heredero de la corriente más tradicional de ese partido, en la línea del ex-presidente Roberto Suazo Córdova (1982-1986). Durante los cuatro años de su gestión al frente del Poder Legislativo, logró proyectar una imagen de estadista que le ganó la simpatía popular, y mantuvo una discreta lejanía del Poder Ejecutivo, hechos que le abonaron para obtener el triunfo en las elecciones de 1997.

Ya en el Gobierno, el presidente Flores empezó a evidenciar un estilo autoritario que se traducía en el control férreo de su gabinete, una centralización exagerada de la toma de decisiones, cooptación de un fuerte sector de la prensa, rechazo a la crítica y a la participación ciudadana, y una excesiva proyección de su imagen y la de la primera dama. Este cuadro indujo a pensar, y a temer, un interés continuista de Flores.

El huracán Mitch. El azote del huracán y tormenta tropical Mitch a finales de 1998, vino a golpear duramente la situación económica y social. La respuesta estatal fue contradictoria, pero básicamente centralizada y concentrada en la figura presidencial. Tuvo un carácter excluyente porque hubo resistencia a aceptar la participación de la sociedad civil y de los gobiernos locales; fue lenta porque no logró pasar de la rehabilitación a la reconstrucción; e inmediatista porque no supo convertir la reconstrucción en transformación, como era el deseo ciudadano y las expectativas de la comunidad internacional.

A más de un año de la catástrofe, el país no ha logrado superar su impacto. El Gobierno se ha visto en verdaderos apuros para lograr los desembolsos ofrecidos por la comunidad internacional, dadas las exigencias de transparencia, participación ciudadana, fortalecimiento local y control de la vulnerabilidad ambiental y social.

La participación de la sociedad civil. El Gobierno, para dar muestras de voluntad política ante las condicionalidades de la comunidad internacional, ha constituido la Comisión de la Sociedad Civil para la Transformación, integrada por representantes de la empresa privada, el Foro Ciudadano (un grupo de incidencia con activa presencia en el país), el Foro Nacional de Convergencia (organismo creado por el Poder Ejecutivo para consensuar sobre algunos temas), la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) e Interforos (una coalición de ONGs, surgida a raíz del huracán).

La incorporación de estos sectores se debió a la beligerancia que adquirieron en materia de propuestas y exigencias de inclusión, durante los meses previos a la reunión de Estocolmo, una de las cuales fue la firma de una declaración conjunta, entre el Gabinete Nacional de Reconstrucción y el Foro Ciudadano, a instancias del presidente Flores, quien optó por un acercamiento para bajar el perfil confrontativo que hasta ese momento había caracterizado a su gobierno. Esto constituye una muestra de los mecanismos de presión y control que se están realizando, de manera dinámica, desde la sociedad civil sobre la gestión gubernamental.

Las novedosas iniciativas de participación ciudadana a nivel local y nacional han hecho que el fortalecimiento de la democracia participativa provenga ahora de la sociedad civil y no del Estado, como había sido hasta antes del huracán Mitch.

El actual proceso electoral

Cuando todavía faltaban cinco meses para completar la mitad de la gestión de Flores, comenzó el proceso electoral más largo de la historia democrática de los últimos 20 años. En diciembre de 2000 se realizarán las elecciones internas partidarias para candidatos presidenciales. Los comicios presidenciales se llevarán a cabo en noviembre del año siguiente.

Al margen de lo honerosos y fastidiosos que suelen resultar estos largos procesos, por primera vez en la historia los precandidatos están elaborando los ejes de su campaña para el próximo año y las bases de un plan de gobierno. Ello hace pensar que podemos estar a las puertas de una campaña sustancialmente diferente a las anteriores, en materia de oferta electoral.

Sin embargo hay una variante más de fondo. Por primera vez en la historia política del país, la confrontación girará alrededor del eje tradición-modernidad, que estará por encima de la ya usual disyuntiva entre liberales y nacionalistas. El panorama se complica más si vemos que en el Partido Nacional se está produciendo una conflictiva concentración de adhesiones alrededor de una candidatura, en tanto, en el Partido Liberal, la situación se presenta todavía dispersa. Es exactamente lo contrario de lo que hasta ahora ha ocurrido en el panorama político, otro indicador de que algo está cambiando en el sistema hondureño.

El Partido Nacional ha conseguido solo un gobierno en las últimas dos décadas, el del presidente Rafael Callejas (1990-1994), quien le insufló a la agrupación aires de modernidad y apertura política –lo mismo que a su gestión gubernamental. Sin embargo estos hechos quedaron minimizados ante los escándalos de corrupción en todas las instancias del poder político.

Este partido, de tradición autoritaria, vertical, excluyente y conservadora, comenzó un proceso de atomización ante el establecimiento de las modernas reglas del juego electoral, y no pudo superar las divisiones provocadas por la realización de elecciones internas. Esto explica, en parte, las derrotas consecutivas, particularmente las de los dos últimos procesos electorales. Sin embargo, su larga estadía en la oposición ha dado lugar a un interesante proceso de contraposición entre modernidad y tradición, que, hasta hoy parece inclinarse hacia la primera, representada por la precandidatura de Ricardo Maduro, ex-director del Banco Central en el único gobierno nacionalista de la transición.

Sin el perfil del político tradicional y hombre carismático, Maduro crece rápidamente en la simpatía ciudadana, tratando de imponer un estilo más democrático y participativo, pese a las resistencias internas de su agrupación y a los intentos liberales de boicotear su candidatura, planteando dudas sobre su nacionalidad.

El Partido Liberal, por su parte, comienza a mostrar rasgos de deterioro institucional y de involución autoritaria, luego de tantos años de ejercicio del poder. Se observa también allí la contradicción entre modernidad y atraso, sin que logren definirse, todavía, las preferencias internas. Sin embargo, el precandidato que presenta hasta ahora el discurso más fresco y renovado, que ayudaría al liberalismo a enfrentar en igualdad de condiciones al candidato del PN, es Manuel («Mel») Zelaya, ex-diputado y ex-director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), cuya cercanía con las municipalidades le ha permitido manejarse muy bien en el tema de la descentralización y de la participación ciudadana, al grado de plantear como eje de su campaña el «poder ciudadano».

Los partidos pequeños, «enanos» o «bonsai», como se les denomina popularmente, no han logrado diferenciarse de manera sustancial de los partidos tradicionales y manejan los mismos vicios y deformaciones de aquéllos en el ejercicio de sus cuotas de poder político. Hasta este momento mantienen un perfil bajo en cuanto a las precandidaturas presidenciales.

Las perspectivas políticas

Al promediar su gestión gubernamental, el presidente Flores ha comenzado a perder poder. Es un hecho natural ante la recomposición de las influencias y de las alianzas intra y extra partidarias, de cara a los nuevos liderazgos. En un intento por recuperar el control, de manera encubierta el presidente

trata de neutralizar la precandidatura del nacionalista Maduro, insistiendo en el tema de su nacionalidad, y de bloquear la precandidatura de Manuel Zelaya, de su propio partido, para imponer una precandidatura más afín a sí mismo.

La recomposición de las alianzas ha disminuido la influencia presidencial sobre el Congreso. Esto obligará a Flores, en el futuro inmediato, a negociar con las diferentes corrientes de su partido y con el principal partido de oposición, para asegurar la gobernabilidad democrática. El PN, por su parte, está comenzando a hacer una verdadera oposición, lo que significa que, en una actitud más abierta, plural y responsable, se podría integrar al proceso de exigencia de cuentas que ya se ha iniciado desde la sociedad civil. Estos reclamos sin duda pueden tornar incómoda la gestión gubernamental, sobre todo si Flores insiste en su estilo autoritario de gobierno.

Las perspectivas democráticas

El proceso de construcción democrática se ha fortalecido sustancialmente en la presente década, logrando avanzar en materia de reforma electoral, y también, aunque algo menos, en relación con la reforma judicial y legislativa. Esta reforma, conocida más como reforma política, servirá para establecer nuevamente la diferencia entre modernidad y tradición hacia el interior de los partidos políticos, y se convertirá en el catalizador de la voluntad política y de la correlación de fuerzas entre una y otra.

Por otro lado, para que este proceso democrático logre salir de la encrucijada en que se encuentra, en la que no hay avance ni retroceso, pero tampoco estancamiento, necesita de un involucramiento mayor de la sociedad civil. Sobre todo para lograr que el proceso y la correlación de fuerzas en el nivel político se defina en favor de la modernidad. La situación se complica más si se incorporan las expectativas de la sociedad, la cual espera que la democracia que se construye sea capaz de responder a las demandas económicas y sociales que se han ido acumulando durante tantos años. De ahí que, para que la democracia sea sostenible en el mediano plazo, se necesite impulsar una verdadera reforma política, y, para que sea sostenible en el largo plazo, se requiere impulsar una política estatal que sea más equitativa, transparente y participativa.

Tegucigalpa, diciembre de 1999